 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	Código: RERF-18-03
	PROCESO: GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Versión: 03 - 23
	NOTIFICACIÓN	Fecha: 26-05 -23
	ÁREA RESPONSABLE: Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal	Página 1

Fecha:12-06-2024
Consecutivo:010

Bucaramanga, 12 de Junio de 2024

Señor(a)
ESAU FLOREZ BOHORQUEZ
 WEB

Referencia: Proceso de responsabilidad fiscal No. 2021-023

Asunto: Notificación por aviso

La Sub Contraloría para procesos de Responsabilidad Fiscal, de la Contraloría General de Santander, con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 106 de la Ley 1474 y a los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, procede a notificar por medio del presente la siguiente actuación administrativa:


No. Providencia:	P.R.F. Radicado: 2021-023
Clase de Proceso	Proceso de Responsabilidad Fiscal.
Fecha:	24/03/2022
Notificado	ESAU FLOREZ BOHORQUEZ
Tipo de Providencia	AUTO DE APERTURA
Proferido por:	Subcontralor(a) Responsabilidad Fiscal
Entidad afectada:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES - SANTANDER
Argumentos de defensa.	No procede
Recursos:	Reposición: No procede
	Apelación: No procede
Plazo respectivo	-----

Acompaña al presente aviso una copia íntegra del acto administrativo, el cual consta de 12 páginas.

La presente notificación se considera surtida al finalizar el día hábil siguiente a su publicación en la página web, de conformidad con los artículos 69 de la Ley 1437 de 2011

Atentamente;


SUSAN YANETH CACERES RINCÓN
 Profesional Especializado adscrita a
 Secretaría Común

	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	Código: RERF-02-02
	PROCESO: GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Versión: 02-17
	FORMATO DE AUTO DE FONDO	Fecha: 03-03 -17
	ÁREA RESPONSABLE: Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Página 1

Fecha 24 MAR 2022
Consecutivo 012

AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION FISCAL

<p>REFERENCIA PRESUNTOS RESPONSABLES</p> <p>ENTIDAD AFECTADA</p> <p>CUANTIA DEL DAÑO ORIGEN DEL HALLAZGO</p>	<p>PROCESO FISCAL No. 2021-023 SNEYDER AUGUSTO PINILLA ALVAREZ JAIRO RIVERA ARCINIEGAS IVAN LORENZO QUINTERO CONTRERAS JULIO CESAR BAUTISTA CHAVEZ ESAU FLOREZ BOHORQUEZ LIDA SALAZAR ARDILA ANDREA JULIANA PERALTA ACEVEDO MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES-SANTANDER</p> <p>\$20.135.587.00 AUDITORIA REGULAR</p>
--	---

Bucaramanga,

VISTOS

La Sub contraloría Delegada para Procesos de Responsabilidad Fiscal, jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios de la Contraloría General de Santander, en ejercicio de la competencia establecida en la Constitución Política de Colombia en los artículos 267, 268 y 272 y el artículo 40 de la Ley 610 del 2000, procede a ordenar la **APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL RADICADO CON EL NÚMERO 2021-023**, teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES


Dio origen a la presente investigación fiscal, el traslado de hallazgo No. 000101 del 29 de diciembre de 2021, en el que se ponen en evidencia presuntas irregularidades ocurridas en el Municipio de Sabana de Torres-Santander, relacionadas con los siguientes:

HECHOS

El Formato de traslado del hallazgo esboza que mediante Resolución se declaró la prescripción de la acción de cobro de la obligación tributaria por concepto de impuesto predial, ascendiendo el daño fiscal a una cuantía de \$20.135.587.
El equipo auditor informa en el hallazgo, lo siguiente:

**“OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 07:
MEDIANTE RESOLUCIÓN SE DECLARÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL POR VALOR DE \$40.581.831.**

CRITERIO:
El Estatuto Tributario Nacional establece en su artículo 817 que la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en

	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	Código: RERF-02-02
	PROCESO: GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Versión: 02-17
	FORMATO DE AUTO DE FONDO	Fecha: 03-03 -17
	ÁREA RESPONSABLE: Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Página 2

que se hicieron exigibles, esto es, para el caso del Municipio de Sabana de Torres, el último día del mes de marzo de cada año, fecha de pago establecida en el Artículo 26 del Acuerdo No. 35 del 30 de noviembre de 2016 por medio del cual se modifica el Estatuto Tributario del Municipio.

CONDICIÓN:

Durante la vigencia 2019 el Municipio de Sabana de Torres profirió 37 resoluciones por las cuales se decreta la prescripción de la obligación tributaria por concepto de Impuesto Predial por un valor de \$40.581.831. En el proceso auditor, mediante información solicitada a la entidad, se logró identificar que, del valor prescrito, el 50% por valor de \$20.446.244 corresponde a cartera de las vigencias 2011 y anteriores; el 18% por \$7.432.640 es de la vigencia 2012, el 18% por \$7.150.569 de cartera de la vigencia 2013 y el 14% por \$5.552.378 a cartera de la vigencia 2014.

Para el caso bajo análisis, entendiéndose que la prescripción del impuesto predial declarada en el municipio de Sabana de Torres, la exigibilidad del pago para cada una de esas vigencias se materializó el último día hábil del mes de marzo de cada año¹, a partir de allí se ha de contabilizar los cinco años para contar la prescripción de la acción de cobro de la referida renta.

Y en tal sentido las prescripciones de hecho acaecidas en el municipio de Sabana de Torres, y que fueron solicitadas por sus deudores que se decretaran su prescripción, refieren que ciertamente el municipio no adelantó ningún trámite de cobro coactivo, sino que dejó pasar el tiempo sin adelantar ninguna actuación lo que generó el detrimento patrimonial que hoy se advierte.

Por otro lado, es necesario precisar que a la luz del artículo 9 de la Ley 610 de 2000, la acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Con respecto a la posible acción disciplinaria por la prescripción de la cartera por Impuesto Predial, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, establece que "la acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados por las faltas disciplinarias desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto".

Por tal razón, para la cartera prescrita de la vigencia 2011 y anteriores por valor de \$40.446.244, no es posible darle un alcance fiscal ni disciplinario a la observación por cuanto la prescripción de estas acciones ya prescribió.

En cuanto a la cartera prescrita en las resoluciones detalladas en el cuadro adjunto de las vigencias 2012 por \$7.432.640, vigencia 2013 por \$7.150.569 y 2014 por \$5.552.378; se realiza una observación administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por valor de \$20.135.587, por el detrimento patrimonial de la entidad por la prescripción de la cartera por concepto de impuesto predial.

NO. RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN	NOMBRE PROPIETARIO	CEDULA CATASTRAL	VIGENCIAS PRESCRITAS	VR PRESCRITO	VR PRESCRITO VIGENCIAS 2011 Y ANTERIORES	VR PRESCRITO VIG 2012	VR PRESCRITO VIG 2013	VALOR OBSERVADO
25	febrero 7 de 2018	Claudina Esteban	10001590007001	1994 a 2013	\$274.311	\$209.889	\$31.734	\$32.688	\$ -
36	febrero 13 de 2018	Claudina Esteban	10001590007000	2002 a 2013	\$119.753	\$84.203	\$17.514	\$18.038	\$ -
37	febrero 13 de 2018	Yarell Tamayo Mendoza	10003250012000	2010 a 2013	\$118.119	\$57.312	\$29.952	\$30.852	\$ -
38	febrero 13 de 2019	Diego Arbey Pino Rojas	10001850005000	2011 a 2013	\$181.818	\$58.824	\$80.588	\$82.406	\$ -
39	febrero 15 de 2018	Luz Stella Mantilla Rincon	10001820016000	1989 a 2013	\$1.754.758	\$1.348.148	\$199.810	\$205.800	\$ -

Escuchamos - Observamos - Controlamos.

Gobernación de Santander - Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
www.contraloriasantander.gov.co

NO. RESOLUCO	FECHA RESOLUCO	NOMBRE PROPIETARIO	CEDULA CATASTRAL	VIGENCIAS PRESCRITAS	VR PRESCRITO	VR PRESCRITO O VIGENCIA S 2011 Y ANTERIORES	VR PRESCRITO O VIG 2012	VR PRESCRITO O VIG 2013	VR PRESCRITO VIG 2014
82	marzo 28 de 2019	Angela Maria Pachon Corzo	10001710003000	2009 a 2013	\$549.510	\$319.920	\$113.100	\$116.490	\$ -
83	marzo 28 de 2019	Neison Cala Vecino	1000060352020	2011 a 2013	\$451.945	\$147.893	\$152.128	\$152.128	\$ -
93	abril 5 de 2019	Jose de Jesus Blanco	1000269007001	2010 a 2014	\$899.424	\$343.899	\$179.730	\$185.121	\$190.874
103	abril 12 de 2019	Arturo Gonzalez Rivero	10001050021000	2008 a 2014	\$411.345	\$224.127	\$80.570	\$62.388	\$84.280
120	mayo 8 de 2019	Ana Yoly Patiño Gomez	10000680014000	2006 a 2013	\$778.870	\$525.080	\$125.020	\$128.770	
137	mayo 15 de 2019	Rosalía Chaparro Rojas	200030236000	2012 a 2014	\$8.431.484	\$ -	\$2.810.488	\$2.810.488	\$2.810.488
184	junio 25 de 2019	Francisco Perez Sedas	10000620014000	2013 a 2014	\$285.030	\$833.020	\$852.010		
185	junio 25 de 2019	Jose de la Cruz Guerrero Ureta	10002970007000	2009 a 2014	\$489.625	\$224.393	\$79.339	\$81.718	\$84.175
186	junio 25 de 2019	Jose Vicente Castañeda	100030805000	2005 a 2014	\$757.297	\$753.103	\$1.398	\$1.398	\$1.398
187	julio 2 de 2019	Hernando de Jesus Anias Alzate	1000060483000	2008 a 2014	\$288.308	\$160.888	\$41.874	\$41.874	\$41.874
188	julio 3 de 2019	Lia Maria Enciso Perez	1000060052000	2012 a 2014	\$1.359.699	\$453.233	\$453.233	\$453.233	
192	julio 4 de 2019	Nidia Centeno Medina	10001640003000	2005 a 2014	\$428.796	\$243.870	\$60.151	\$81.958	\$83.817
196	julio 8 de 2019	Luz Stella Serrano Prada	10000450015000	2004 a 2014	\$1.184.494	\$754.784	\$139.030	\$143.200	\$147.500
197	julio 16 de 2019	Edilma Rojas Ardila	10000620015000	2013 a 2014	\$884.920			\$435.920	\$449.000
198	julio 16 de 2019	Alirio Arciniegas Rojas	10001510004001	1999 a 2014	\$109.755	\$75.186	\$11.187	\$11.520	\$11.862

a

NO. RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN	NOMBRE POSEEDOR	CEDULA CATASTRAL	VIGENCIAS PRESCRITAS	VR PRESCRITO	VR PRESCRITO O VIGENCIA ANTERIORES	VR PRESCRITO O VIG 2012	VR PRESCRITO O VIG 2013	VR PRESCRITO O VIG 2014	
		Rodriguez								
221	agosto 28 de 2018	Luz Flor Neira Muñoz	1000061001300	2008 a 2014	\$1.057.710	\$657.180	\$129.580	\$133.470	\$137.470	
222	septiembre 2 de 2018	Nancy Gomez	1000038001200	1998 a 2014	\$2.498.654	\$1.684.114	\$270.000	\$278.100	\$286.440	
223	septiembre 2 de 2018	Gloria Esperanza Vargas	1000063001300	2009 a 2014	\$535.640	\$255.950	\$80.480	\$83.200	\$86.000	
224	septiembre 3 de 2018	Jesús Adolfo Alvarez Bohorquez	1000311000400	1984 a 2014	\$1.038.232	\$785.918	\$88.102	\$90.748	\$93.484	
226	septiembre 4 de 2018	Yesith Helena Henao Castro	1000331000100	2009 a 2014	\$2.107.683	\$1.007.235	\$358.085	\$368.768	\$377.775	
227	octubre 29 de 2018	Alfonso Castro	100060326000	1994 a 2014	\$1.343.089	\$1.108.671	\$78.808	\$78.808	\$78.808	
TOTALES						\$40.581.831	\$20.446.244	\$7.432.640	\$7.150.569	\$5.552.378

(...)"

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:

En la respuesta de la administración anterior no se exponen argumentos que permitan desvirtuar la observación, pero solicita prórroga para responderla, la cual no es posible otorgar por lo dispuesto en el artículo 44 de la Resolución 230 de 2019 de la Contraloría General de Santander. En cuanto a la respuesta de la actual administración, se infiere la aceptación de la observación realizada por el equipo auditor. Del presunto responsable disciplinario y fiscal Jairo Rivera Arciniegas no se allega respuesta a la carta de observaciones".

Ante la falta de claridad de los hechos investigados, se profirió auto de indagación preliminar. Una vez allegado el material probatorio se procede a aperturar la investigación fiscal.


FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, los cuales establecen que la vigilancia de la Gestión Fiscal de la Administración Pública corresponde a la Contraloría General de la República y por reenvío a la Contraloría Departamental.

Artículos 40 y 41. De la ley 610 de 2.000, donde consagra el proceso de Responsabilidad Fiscal, tendiente al esclarecimiento de las presuntas irregularidades que conlleven daño fiscal, detrimento, menoscabo al patrimonio del Estado.

Artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2.011, relacionados con el sistema de notificación dentro de los procesos de responsabilidad fiscal.

Artículos 106 a 120 de la Ley 1474 de 2.011, relacionado con las modificaciones a la regulación del procedimiento ordinario de responsabilidad fiscal.

	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	Código: RERF-02-02
	PROCESO: GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Versión: 02-17
	FORMATO DE AUTO DE FONDO	Fecha: 03-03 -17
	ÁREA RESPONSABLE: Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Página 5

CONSIDERACIONES

El proceso de responsabilidad fiscal tiene como fin determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta causen por acción u omisión en forma dolosa o culposa un daño patrimonial al Estado.

En caso de que esta responsabilidad se determine por el funcionario encargado de adelantar el proceso respectivo, se deberá llevar a cabo el resarcimiento del daño ocasionado con su conducta mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad, teniéndose en cuenta los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal.

El daño patrimonial al Estado es la lesión causada al patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producido por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que, en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado.


Esta delegada, en relación con el daño patrimonial, deberá decir lo siguiente:

LEY 610 DE 2.000: "ARTÍCULO 6° DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzca directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público".

En este orden normativo, las Contralorías tienen como atribución, la de "velar porque quienes manejan los fondos y bienes públicos lo hagan con sujeción a los principios señalados en las normas indicadas y aquellos de la función administrativa, aplicando para ello los sistemas de control fiscal financiero, de legalidad, de gestión, de resultados y de revisión de cuentas; y si de tal evaluación se desprende que los gestores públicos no han manejado los recursos del erario con la pulcritud y diligencia que ordenan las disposiciones constitucionales y legales, bien pueden los organismos de control deducir la correspondiente responsabilidad fiscal."

Dado que de la gestión fiscal depende la realización de los cometidos estatales, el Estado cuenta con entidades de control encargadas de vigilar que esa gestión sea realizada de acuerdo con los principios establecidos para la función pública, es decir, que los recursos sean destinados a satisfacer los fines estatales de la mejor manera posible, evitando despilfarros, pérdidas, hurtos, desviaciones, etc.

Ahora bien, si la conducta del servidor público o particular es de manejo o administración de recursos o fondos públicos, estaremos ante la inminencia de la gestión fiscal. O visto desde la perspectiva de la omisión, si el deber funcional del investigado se adecuaba a una de las conductas descritas y no la ejecutó, estaremos ante una omisión constitutiva de responsabilidad.

	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	Código: RERF-02-02
	PROCESO: GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Versión: 02-17
	FORMATO DE AUTO DE FONDO	Fecha: 03-03 -17
	ÁREA RESPONSABLE: Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Página 6

Así mismo tal y como lo recalca el mismo Consejo de Estado, al estudiar la figura del daño desde el punto de vista legal de conformidad con el artículo 6° de la Ley 610 de 2000, concluye que:

"en resumen, daño patrimonial es toda disminución de los recursos del estado, que cuando es causado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un gestor fiscal, genera responsabilidad fiscal. En este orden de ideas, todo daño patrimonial, en última instancia, siempre afectará el patrimonio estatal en abstracto. Sin embargo, cuando se detecta un daño patrimonial en un organismo o entidad, el ente de control debe investigarlo y establecer la responsabilidad fiscal del servidor público frente a los recursos asignados a esa entidad u organismo, pues fueron solamente éstos los que estuvieron bajo su manejo y administración. Es decir que el daño por el cual responde, se contrae al patrimonio de una entidad u organismo particular y concreto."

Lo anterior quiere decir que todo daño patrimonial causado al Erario siempre afectará el patrimonio del Estado y en consecuencia le compete al Ente Fiscalizador investigarlo y derivar la responsabilidad fiscal si ello fuere procedente. En este orden jurídico, el daño siempre estará representado en el menoscabo del patrimonio público cualquiera que fuere su connotación y para efectos de la imputación de la responsabilidad fiscal, el mismo debe darse en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta.

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD AFECTADA

La entidad afectada con los hechos materia de la investigación fiscal de la referencia es el MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, identificado con el NIT. No. 890.204.643.

IDENTIFICACION DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES

SNEYDER AUGUSTO PINILLA ALVAREZ, identificado con el No. de C.C. 1.101.200.853 en calidad de Alcalde Municipal en la vigencia 2012 a 2015.

JAIRO RIVERA ARCINIEGAS, identificado con el No. de C.C 91.228.183 en calidad de Alcalde Municipal en la vigencia 2016-2019.


IVAN LORENZO QUINTERO CONTRERAS, identificado con el No. de C.C 91.445.508 en calidad de secretario general y de Hacienda del 4 de enero de 2012 al 30 de agosto de 2013.

JULIO CESAR BAUTISTA CHAVEZ, identificado con el No. de C.C. 91.234.484, en calidad de secretario general y de Hacienda del 4 de septiembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015.

ESAU FLOREZ BOHORQUEZ, identificado con el No. de C.C 1.098.625.805, en calidad de secretario general y de Hacienda del 4 de enero de 2016 al 15 de febrero de 2018.

LIDA SALAZAR ARDILA identificada con el No. de C.C 37.877.614, en calidad de secretaria general y de Hacienda del 22 de febrero de 2018 al 2 de mayo de 2019.

ANDREA JULIANA PERALTA ACEVEDO, identificada con el No. de C.C 37.900.277, en calidad de secretaria general y de Hacienda del 3 de mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019

	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	Código: RERF-02-02
	PROCESO: GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Versión: 02-17
	FORMATO DE AUTO DE FONDO	Fecha: 03-03 -17
	ÁREA RESPONSABLE: Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Página 7

DETERMINACION DEL DAÑO

El objeto de la Responsabilidad Fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal, es decir, en este se establece claramente que un determinado servidor público o particular debe responder por las consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el daño causado al erario público.

El daño patrimonial al Estado, como su nombre lo indica, es un fenómeno de carácter estrictamente pecuniario o económico; consiste en la pérdida de recursos por parte del Estado. Es el empobrecimiento del erario. De esta forma, dentro de la tipología de los perjuicios podemos establecer que el daño patrimonial al Estado es un perjuicio material - quedando excluida la posibilidad de que exista un perjuicio inmaterial -.

Esta Delegada en relación con el daño patrimonial deberá decir lo siguiente:

LEY 610 DE 2.000: "ARTÍCULO 6º DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzca directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público".


En este orden normativo, las Contralorías tienen como atribución, la de "velar porque quienes manejan los fondos y bienes públicos lo hagan con sujeción a los principios señalados en las normas indicadas y aquellos de la función administrativa, aplicando para ello los sistemas de control fiscal financiero, de legalidad, de gestión, de resultados y de revisión de cuentas; y si de tal evaluación se desprende que los gestores públicos no han manejado los recursos del erario con la pulcritud y diligencia que ordenan las disposiciones constitucionales y legales, bien pueden los organismos de control deducir la correspondiente responsabilidad fiscal."

Dado que de la gestión fiscal depende la realización de los cometidos estatales, los Estados cuentan con entidades de control encargadas de vigilar que esa gestión sea realizada de acuerdo con los principios establecidos para la función pública, es decir, que los recursos sean destinados a satisfacer los fines estatales de la mejor manera posible, evitando **despilfarros, pérdidas, hurtos, desviaciones, etc.**

Ahora bien, si la conducta del servidor público o particular es de manejo o administración de recursos o fondos públicos, estaremos ante la inminencia de la gestión fiscal. O visto desde la perspectiva de la omisión, si el deber funcional del investigado se adecúa a una de las conductas descritas y no la ejecutó, estaremos ante una omisión constitutiva de responsabilidad.

Así mismo tal y como lo recalca el mismo Consejo de Estado, al estudiar la figura del daño desde el punto de vista legal de conformidad con el artículo 6º de la Ley 610 de 2000, concluye que:

"en resumen, daño patrimonial es toda disminución de los recursos del estado, que cuando es causado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un gestor fiscal, genera responsabilidad fiscal. En este orden de ideas, todo daño patrimonial, en última

	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	Código: RERF-02-02
	PROCESO: GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Versión: 02-17
	FORMATO DE AUTO DE FONDO	Fecha: 03-03 -17
	ÁREA RESPONSABLE: Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Página 8

instancia, siempre afectará el patrimonio estatal en abstracto. Sin embargo, cuando se detecta un daño patrimonial en un organismo o entidad, el ente de control debe investigarlo y establecer la responsabilidad fiscal del servidor público frente a los recursos asignados a esa entidad u organismo, pues fueron solamente éstos los que estuvieron bajo su manejo y administración. Es decir que el daño por el cual responde, se contrae al patrimonio de una entidad u organismo particular y concreto.”

Lo anterior quiere decir que todo daño patrimonial causado al Erario siempre afectará el patrimonio del Estado y en consecuencia le compete al Ente Fiscalizador investigarlo y derivar la responsabilidad fiscal si ello fuere procedente.

En este orden jurídico, el daño siempre estará representado en el menoscabo del patrimonio público cualquiera que fuere su connotación y para efectos de la imputación de la responsabilidad fiscal, el mismo debe darse en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta.

Para el caso que nos ocupa, conforme a las pruebas recaudadas durante el proceso auditor, se estima un presunto detrimento patrimonial al Estado en una cuantía de la cartera prescrita en las resoluciones detalladas en el cuadro precitado anteriormente de las vigencias 2012 por \$7.432.640, vigencia 2013 por \$7.150.569 y 2014 por \$5.552.378; para un total de \$20.135.587, VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS por el detrimento patrimonial de la entidad en la prescripción de la cartera por concepto de impuesto predial.

Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones de orden jurídico con relación a la exigibilidad del impuesto predial, su prescripción y la acción fiscal frente a este fenómeno, como a continuación se enuncian:

Valga decir, en primer lugar, que la prescripción ocurre por el simple paso del tiempo y para su consumación no requiere de acto administrativo que la declare. En este sentido, el artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional, establece el término de cinco (5) años para la ocurrencia del fenómeno prescriptivo de las acciones de cobro en materia tributaria, a partir de los siguientes casos, señalados en la norma, así:

Artículo 817. Término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:

- 1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.*
- 2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.*
- 3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.*
- 4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. (...).*

De acuerdo con la norma transcrita, en los casos en que la Administración es quien determina la obligación tributaria, como por ejemplo en el impuesto predial, el término de prescripción de la obligación cuenta desde el momento en que el acto oficial de determinación del gravamen queda en firme; el cual, una vez ejecutoriado, sirve de título ejecutivo y de documento respecto del cual se contabiliza el término de cinco años previsto en el Estatuto Tributario para la prescripción de la acción de cobro.

	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	Código: RERF-02-02
	PROCESO: GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Versión: 02-17
	FORMATO DE AUTO DE FONDO	Fecha: 03-03 -17
	ÁREA RESPONSABLE: Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Página 9


Lo anterior conduce a un razonamiento necesario en el sentido que, si bien es necesario expedir el título ejecutivo para que se inicie el conteo del término de prescripción, ello no autoriza por sí solo a la administración para tomarse un plazo indefinido, puesto que para hacer exigible la obligación, corre un nuevo término de 5 años desde el momento de causación del tributo que en el caso del impuesto predial es el primero de enero de cada año. Ello indica que el fenómeno de la extinción de la obligación ocurre con el paso de los 5 años, término consagrado por la norma.

Quiere decir, además, que frente a cada una de las obligaciones por impuesto predial corren los términos de manera independiente, y que la prescripción de la obligación ocurre si la administración no ejerce actos que conlleven su interrupción. Ello a su vez implica que, una vez ocurrida la prescripción, se materializa el daño fiscal, puesto que al extinguirse la obligación se niega la oportunidad de que los dineros ingresen a las arcas del ente territorial. A partir de este momento se activa la competencia de la Contraloría para determinar la responsabilidad por la ocurrencia del detrimento patrimonial, lo que implica que, pasados 5 años desde la extinción de la obligación, el ente de control pierde la competencia temporal para conocer de los hechos que llevaron a la pérdida de los recursos del Estado. Así lo prevé el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 que dispone que "La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal".

En punto a la inexistencia de liquidación del impuesto o acto administrativo que lo declare, es menester indicar que este Despacho sigue la misma línea de la Sentencia proferida el veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014), con ponencia del Consejero Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, dentro del proceso de Acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicación Nro 500012331000200700320-01, y en tal sentido, se tomará como punto de partida la fecha de exigibilidad de la obligación. Se transcribe a continuación lo pertinente de la decisión:

"Sin embargo, para la Sala, en el caso concreto ha quedado en evidencia que el municipio demandado liquidó el impuesto a cargo del contribuyente por primera vez en la Resolución 240 demandada. En consecuencia, lo propio es que, por excepción, se aplique el mismo principio que rige para cuando se toma como fecha de referente la de presentación de la declaración, que no es otra que la fecha en que la obligación se hace exigible. Esta regla, valga precisar, se aplica de manera excepcional en el caso concreto habida cuenta de que, se reitera, el municipio no probó que el Departamento del Meta tuviera la obligación de declarar y pagar el impuesto predial".

Es así que este órgano de control frente a los años 2012, 2013 y 2014 se encuentra en término para determinar la responsabilidad fiscal de quienes, teniendo a su cargo el cobro coactivo y persuasivo de las obligaciones a cargo del municipio, omitieron el deber que les correspondía, puesto que su actuar generó una disminución de los recursos del ente territorial. En este sentido, se vincularán las secretarías de hacienda de la época, y los Alcaldes Municipales, puesto que su gestión fiscal está enmarcada dentro del objeto general de sus cargos, encaminado a *"Dirigir, organizar, formular políticas y adoptar planes, programas y proyectos de la administración municipal en los procesos financieros, económicos del Municipio como la consolidación, presentación, ejecución y control del presupuesto, la contabilización de todas las transacciones financieras, el recaudo y control de los tributos, la consecución y manejo de los recursos financieros, la realización de los cobros coactivos y en general todas las funciones de tesorería señalada en las normas vigentes, así como lo relacionado en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales de acuerdo a las competencias de la dependencia a su cargo"*.

	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	Código: RERF-02-02
	PROCESO: GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Versión: 02-17
	FORMATO DE AUTO DE FONDO	Fecha: 03-03 -17
	ÁREA RESPONSABLE: Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Página 10

En este sentido, según información que obra en el expediente, se conoce que entre las vigencias 2012 a 2019 fungieron como alcaldes Municipales **SNEYDER AUGUSTO PINILLA ALVAREZ**, **JAIRO RIVERA ARCINIEGAS**, secretarios de hacienda **IVAN LORENZO QUINTERO CONTRERAS**, **JULIO CESAR BAUTISTA CHAVEZ**, **ESAU FLOREZ BOHORQUEZ**, **LIDA SALAZAR ARDILA**, **ANDREA JULIANA PERALTA ACEVEDO**, personas que durante su vinculación con el ente territorial tenían asignadas estas funciones.

Teniendo en cuenta que la responsabilidad fiscal tiene el carácter resarcitorio, es decir, que busca reparar el patrimonio público menoscabado por una gestión fiscal irregular, se considerará que al darse los presupuestos contenidos en el artículo 40 de la Ley 610 de 2.000, respecto de las obligaciones de las vigencias 2012, 2013 y 2014, es procedente **Ordenar la Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2021-023**, en contra de los señores **SNEYDER AUGUSTO PINILLA ALVAREZ**, identificado con el No. de C.C. 1.101.200.853 en calidad de Alcalde Municipal en la vigencia 2012 a 2015, **JAIRO RIVERA ARCINIEGAS**, identificado con el No. de C.C. 91.228.183 en calidad de Alcalde Municipal en la vigencia 2016-2019, **IVAN LORENZO QUINTERO CONTRERAS**, identificado con el No. de C.C. 91.445.508 en calidad de secretario general y de Hacienda del 4 de enero de 2012 al 30 de agosto de 2013, **JULIO CESAR BAUTISTA CHAVEZ**, identificado con el No. de C.C. 91.234.484, en calidad de secretario general y de Hacienda del 4 de septiembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015, **ESAU FLOREZ BOHORQUEZ**, identificado con el No. de C.C. 1.098.625.805, en calidad de secretario general y de Hacienda del 4 de enero de 2016 al 15 de febrero de 2018, **LIDA SALAZAR ARDILA** identificada con el No. de C.C. 37.877.614, en calidad de secretaria general y de Hacienda del 22 de febrero de 2018 al 2 de mayo de 2019, **ANDREA JULIANA PERALTA ACEVEDO**, identificada con el No. de C.C. 37.900.277, en calidad de secretaria general y de Hacienda del 3 de mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019; con ocasión al acaecimiento del daño fiscal consistente en la prescripción del impuesto predial de las vigencias 2012, 2013 y 2014 en las resoluciones a que hace referencia este proveído, en suma, de **VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS \$20.135.587 M/CTE.**

VINCULACION DE GARANTE

Finalmente se dirá que teniendo en cuenta que dentro del plenario se expresó que se anexaban las pólizas de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, y estas no fueron allegadas no se ordenará vinculación de garante.

DECRETO DE PRUEBAS

Tener como pruebas las legalmente aportadas y allegadas en el traslado de hallazgo y que reposan en el libelo procesal.

Por otra parte, se considera necesario por su conducencia y pertinencia en el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades que aquí se endilgan, decretar las siguientes pruebas de oficio:

Oficiar a la Alcaldía Municipal de Sabana de Torres, para que allegue:

	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	Código: RERF-02-02
	PROCESO: GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Versión: 02-17
	FORMATO DE AUTO DE FONDO	Fecha: 03-03 -17
	ÁREA RESPONSABLE: Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Página 11

- Remitir copia completa y legible de cada una de las Pólizas Globales de Manejo y contra los riesgos que impliquen menoscabo de fondos y/o fallos con responsabilidad fiscal, con su clausulado completo, certificados y anexos respectivos, adquiridas en las vigencias 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019; en caso de no haberse adquirido, expedir certificación en tal sentido.

Las demás que se consideren pertinentes y conducentes para esclarecer los hechos materia de la presente investigación.

MEDIDAS CAUTELARES


El fin primordial del proceso de Responsabilidad Fiscal es el resarcimiento del daño, en tal sentido, el Despacho ordenará la investigación de bienes de los presuntos responsables, en consecuencia, procederá a oficiar a las autoridades competentes a efectos de indagar por los bienes inmuebles y vehículos que posea la investigada:

NOMBRE	CEDULA
SNEYDER AUGUSTO PINILLA ALVAREZ	1.101.200.853
JAIRO RIVERA ARCINIEGAS	91.228.183
IVAN LORENZO QUINTERO CONTRERAS	91.445.508
JULIO CESAR BAUTISTA CHAVEZ	91.234.484
ESAU FLOREZ BOHORQUEZ	1.098.625.805
LIDA SALAZAR ARDILA	37.877.614
ANDREA JULIANA PERALTA ACEVEDO	37.900.277

En mérito de lo expuesto, el Despacho del Sub contralor delegado para Procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Administrativos sancionatorios,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNESE la Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal radicado con el No. 2021-023 en contra de los (as) señores (as) **SNEYDER AUGUSTO PINILLA ALVAREZ**, identificado con el No. de C.C. 1.101.200.853 en calidad de Alcalde Municipal en la vigencia 2012 a 2015, **JAIRO RIVERA ARCINIEGAS**, identificado con el No. de C.C 91.228.183 en calidad de Alcalde Municipal en la vigencia 2016-2019, **IVAN LORENZO QUINTERO CONTRERAS**, identificado con el No. de C.C 91.445.508 en calidad de secretario general y de Hacienda del 4 de enero de 2012 al 30 de agosto de 2013, **JULIO CESAR BAUTISTA CHAVEZ**, identificado con el No. de C.C. 91.234.484, en calidad de secretario general y de Hacienda del 4 de septiembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015, **ESAU FLOREZ BOHORQUEZ**, identificado con el No. de C.C 1.098.625.805, en calidad de secretario general y de Hacienda del 4 de enero de 2016 al 15 de febrero de 2018, **LIDA SALAZAR ARDILA** identificada con el No. de C.C 37.877.614, en calidad de secretaria general y de Hacienda del 22 de febrero de 2018 al 2 de mayo de 2019, **ANDREA JULIANA PERALTA ACEVEDO**, identificada con el No. de C.C 37.900.277, en calidad de secretaria general y de Hacienda del 3 de mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	Código: RERF-02-02
	PROCESO: GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Versión: 02-17
	FORMATO DE AUTO DE FONDO	Fecha: 03-03 -17
	ÁREA RESPONSABLE: Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Página 12

ARTÍCULO SEGUNDO: RECEPCIÓNESE versión libre y espontánea a los (as) señores (as) SNEYDER AUGUSTO PINILLA ALVAREZ, JAIRO RIVERA ARCINIEGAS, IVAN LORENZO QUINTERO CONTRERAS, JULIO CESAR BAUTISTA CHAVEZ, ESAU FLOREZ BOHORQUEZ, LIDA SALAZAR ARDILA Y ANDREA JULIANA PERALTA ACEVEDO, previa citación enviada por este despacho.

ARTÍCULO TERCERO: TÉNGANSE como pruebas los documentos allegados con el formato de traslado de hallazgo.

ARTÍCULO CUARTO: OFICIAR a la Alcaldía Municipal de Sabana de Torres, para que allegue:

- *Remitir copia completa y legible de cada una de las Pólizas Globales de Manejo y contra los riesgos que impliquen menoscabo de fondos y/o fallos con responsabilidad fiscal, con su clausulado completo, certificados y anexos respectivos, adquiridas en las vigencias 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019; en caso de no haberse adquirido, expedir certificación en tal sentido.*

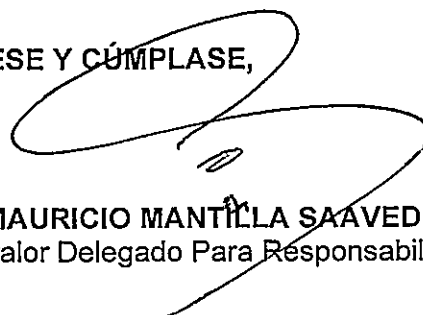
ARTÍCULO QUINTO: POR SECRETARIA de esta delegada indagar por los bienes muebles y vehículos que posean los investigados:

NOMBRE	CEDULA
SNEYDER AUGUSTO PINILLA ALVAREZ	1.101.200.853
JAIRO RIVERA ARCINIEGAS	91.228.183
IVAN LORENZO QUINTERO CONTRERAS	91.445.508
JULIO CESAR BAUTISTA CHAVEZ	91.234.484
ESAU FLOREZ BOHORQUEZ	1.098.625.805
LIDA SALAZAR ARDILA	37.877.614
ANDREA JULIANA PERALTA ACEVEDO	37.900.277

ARTICULO SEXTO: NOTIFÍQUESE la presente providencia a la presunta responsable fiscal, en la forma y términos establecidos en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2.011 que a su vez remite a los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2.011. Haciéndole saber que contra este Auto no procede recurso alguno.

ARTÍCULO SEPTIMO: COMUNÍQUESE al representante legal del Municipio de Sabana de Torres, sobre la apertura de la presente investigación, solicitándole su oportuna colaboración.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



MAURICIO MANTILLA SAAVEDRA
Subcontralor Delegado Para Responsabilidad Fiscal

Proyectó: Wilson Orlando Rincón Pacheco
Revisó y corrigió: y aprobó: Mauricio Mantilla Saavedra